M.R.N - DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GENERO

Huinca Renancó, Cba; 29/12/2020. **Y VISTOS** estos autos caratulados “M.R.N s/ Denuncia de Violencia Familiar” Expte. XXXXX, que se tramitan ante este Juzgado de Control, Violencia Familiar y Género, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de XXXX XXXXX, Provincia de Córdoba Y Considerando: a) lo expresado en la constancia precedente de la que se desprende la recepción de un mensaje vía aplicación Whatsapp al celular del Suscripto n° XXXXXXXX, proveniente del n° XXXXXXXX expresando: “Buenas tardes, señor Juez. Mi nombre es M.B, tengo 19 años, soy de XXXX. Me dirigió a usted, porque quiero realizar una denuncia por acoso sexual. Esta situación surgió a que actualmente salieron a la luz testimonios de otras jóvenes que padecieron lo mismo. En mi caso, el acosador es mi tío, y esto sucedió en la infancia hasta la mitad de mi adolescencia. Me pasaron su contacto, para que me dirigiera a usted, para encargarme de la situación, para que este hombre no vuelva a repetir estos actos horribles”. b) Teniendo en cuenta el contenido de lo narrado por la Srta. B, que evidencia una situación familiar particular como así circunstancias enmarcadas como “Violencia de Género” – Ley 9283 y modif. por ley n° 10400- y Ley nacional n° 26485 y de riesgo actual para la Srta. M.B; c) Que la Srta. B, tiene domicilio en Jurisdicción de la Localidad de XXXXXXXX, y ha expresado que se encuentra –circunstancialmente- en estos momentos en la Ciudad de San Rafael, Prov. de Mendoza, d) Poniendo en relieve que los pactos y convenciones internacionales en la materia imponen adoptar medidas urgentes: así la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en particular por lo expresado en el Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a

cabo lo siguiente: *. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;.. *. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; *. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.” Que Las estadísticas a nivel local, provincial y nacional indican que la problemática de violencia familiar y género día a día van cobrando víctimas fatales, por tal distintos autores, expositores y especialistas en la materia establecen que debemos “juzgar con perspectiva de género”, Que el art. 3 de la mencionada Convención expresa: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”) Por lo que resulta importante que los operadores en la materia que nos ocupa, giren la óptica e incorporen la “Perspectiva de Género”, en la resolución de las distintas actuaciones que llegan a nuestro despacho, teniendo en cuenta que la Violencia de Género es un “problema social”. En el Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina la jueza federal chaqueña Zunilda Nirempenger, sintetizó: “A pesar de la concientización que existe, de la capacitación que se ha instaurado en los distintos lugares, aún estamos bastante en los comienzos de una implementación real de la perspectiva de género en algunas decisiones y actitudes que se toman al momento de encontrarnos con casos que requieran un criterio ecuaníme de los operadores”. Así también Casanello expresó: “Los casos más exitosos en el juzgado fueron cuando se les restituye la palabra a esas mujeres.” En tanto que la Dra. Cafure de Battistelli, ex vocal del TSJ de Córdoba, hizo un racconto por los logros de la apertura de la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial, como así también los avances con la ley 9283 de Violencia Familiar. Subrayó que uno de los desafíos de hoy es “evitar la impunidad de las causas pequeñas, que alimentan la violencia” e instaurar el juzgamiento con perspectiva de

género en los tribunales locales. Que la Oficina de la Mujer de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación: a través de la Guía interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres. Tutela judicial efectiva - Medidas cautelares: ha señalado: *) “por tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales en casos urgentes, la ritualidad de las pruebas no debería ser la misma que se exige en los procesos ordinarios, pues se trata de que en un breve lapso de tiempo se adopten las medidas conducentes para la protección inmediata de los derechos amenazados. Por ejemplo, mientras que en derecho penal una amenaza contra la vida sólo se configura con la iniciación de la etapa ejecutiva del delito, en materia cautelar la protección del derecho a la vida debería incluir la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza con tal de que ella sea cierta.” (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007, párrafo 57.3.) *) “la prevalencia de estereotipos culturales discriminatorios por razones de género sigue constituyendo un obstáculo al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, impide su acceso a la administración de justicia y contradice la obligación de debida diligencia de los Estados que deben modificar patrones sociales y culturales de hombres y mujeres y eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas estereotipadas de inferioridad o superioridad de alguno de los sexos;” (MESECVI, Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, 19 de septiembre de 2014, página 3. (mecanismo de seguimiento de la convencion de Belen do Para) *) los Estados tienen la obligación de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos y armonizarlos con la Convención de Belém do Pará, para garantizar la debida diligencia para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, contra toda forma de violencia por razones de género, debiendo prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, respondiendo ante las víctimasde actores estatales, no estatales y particulares; (MESECVI, Declaración sobre la Violencia

contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, 19 de septiembre de 2014, página 5) *) ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección. (CorteIDH, Caso Inés Fernández Ortega vs. México, sentencia del 30 de agosto del 2010, Serie C-215.) *) Para cumplir con la obligación de investigar el Estado debe observar lo indicado en (...) esta Sentencia, en el sentido de que ‘una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva’. Asimismo, en virtud de que (...) [el Estado] ratificó (...) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en el Artículo 7.b. de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. (CorteIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre del 2006 (fondo, reparaciones y costas), Serie C-160, párrafo 37.) *) los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debeprevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las

obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. (CorteIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009, Serie C-205, párrafos 258 y 285.) *) un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos. (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007, Capítulo I, A, párrafo 1.) *) la aceptación por parte de los funcionarios estatales de la violencia doméstica influye negativamente en este caso, al no tomar en cuenta durante el proceso legal elementos claros y determinantes de prueba revelados en la investigación policial, retrasando injustificadamente la sanción del agresor. (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007, Capítulo II, A, párrafo 157.) *) el poder judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de derechos humanos. Una respuesta judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un recurso ante los hechos sufridos y que éstos no queden impunes. (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007, Capítulo I, A, párrafo.)

Teniendo en cuenta la situación particular de pandemia que padece actualmente la población, por #Covid-19, y las medidas adoptadas oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, (Decreto Nacional n° 297/2020) y la disposición de este Juzgado efectuada en distintas actuaciones de Violencia Familiar y Género durante el periodo de este año 2020, en cuanto a la habilitación de la Atención OnLine/Virtual en casos de Violencia de Familiar y Género en el ámbito de este Juzgado de Control y Violencia Familiar de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de XXXXXx

XXXXX, con competencia en el Dpto. Gral. Roca de esta Provincia de Córdoba, para la recepción de denuncias, procedimientos, actuaciones de oficio, llamadas a los números telefónicos de urgencia: *101 *144 como así para todas aquellas actuaciones en la materia que ameriten la inmediata intervención RESUELVO: dar por INICIADAS DE OFICIO las presentes actuaciones, invitando a la Srta. M.B a efectuar la misma en el formulario de denuncias establecido en la Ley Prov. n° 9283, teniendo en cuenta que la mencionada se encuentra actualmente en la Ciudad de San Rafael, Prov. de Mendoza, disponer para ello todos los medios tecnológicos necesarios a los fines de dar inmediata respuesta, efectuándose la misma por Video Conferencia a través de la aplicación WhatsApp, con el objeto de la comunicación directa e inmediata con la víctima, como así para las notificaciones efectuando la correspondientes actas y certificación.

MAZUQUI, Claudio Fabián JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

G

O

M

E

Z

,

P

a

u

l

a

R